

Plaza pública

para la edición del 4 de julio de 1995

San Andrés: ¿última llamada?

Miguel Ángel Granados Chapa

A las trece horas de hoy se abrirá el cuarto capítulo de San Andrés, es decir de la ronda de conversaciones abierta entre la administración del Presidente Zedillo y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. En las tres oportunidades anteriores se ha avanzado poco en el proceso de pacificación, pero se ha mantenido al menos la continuidad que implica convocar cada vez a nuevos encuentros. Podríamos haber llegado, sin embargo, al límite, y la reunión de hoy podría ser por desgracia el punto final de, al menos, esta fase de los intentos por negociar en vez de guerrear.

Varias circunstancias complican el entorno en que se reanudan hoy las conversaciones. Las enumeraremos en este orden: las que se relacionan con el gobierno, con el EZLN y con la Conai, la comisión mediadora.

Ayer lunes, apenas, tomó posesión un nuevo secretario de Gobernación. El anterior titular de esa oficina, Esteban Moctezuma, se encontró personalmente con el subcomandante insurgente Marcos el 15 de enero. Y si bien la reunión de entonces tenía un carácter institucional, y aunque a últimas fechas Marcos no mostraba buena opinión sobre su interlocutor, quizá el reemplazo del responsable de las conversaciones pudiera

erigirse en un obstáculo o un factor de demora para el reencuentro.

Al anunciarse la sustitución de Moctezuma por Chuayfett se tuvo buen cuidado de advertir que esa medida no afectaba la **integración** ni las instrucciones del grupo gubernamental en el dialogo de San Andrés. Aparte el hecho de que tal anuncio comprobó que el grupo era ajeno a Moctezuma, la decisión **ratifica** la **estrategia de endurecer** las condiciones **para una eventual** negociación, y la exigencia de definiciones zapatistas. Según la perspectiva gubernamental, faltan estas definiciones (por más que consten desde el primer día del alzamiento, hace ya 18 meses), lo que posibilita al zapatismo armado no acreditar con suficiencia su voluntad negociadora.

El gobierno parece resuelto a arrinconar al zapatismo, para forzarlo a aceptar una negociación limitada a **temas** indígenas y chiapanecos. Entre los medios de apremio que **puso en práctica** recientemente, sobresale la expulsión de tres sacerdotes, que actuaban en comunidades situadas en la zona del conflicto, acción que fue extraña o cínicamente considerada como útil para distensar las condiciones prevalecientes en esa comarca.

Por su parte, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional **ha adoptado** una iniciativa que, aunque no entraña en sí misma un **freno a** las conversaciones, podría obligar a una espera antes de continuarlas y llevarlas a su culminación. El zapatismo armado ha puesto su destino en manos de la sociedad civil, a la que

consultará para saber su opinión sobre el curso futuro de las acciones zapatistas. La encuesta correspondiente será realizada a finales de agosto, por lo que el EZLN podría plantear que ni siquiera son pertinentes discusiones sobre reglas de procedimiento antes de que los zapatistas sepan a qué atenerse.

Igualmente pueden convertirse en obstáculos para el curso normal de los encuentros en San Andrés las objeciones zapatistas a la constante movilización militar, y otros hechos relacionados con la presencia castrense en la zona. En este sentido, el informe de la agrupación norteamericana de derechos humanos Watch Americas sobre episodios ocurridos al inicio de la insurrección (principalmente la ejecución de varias personas en el mercado de Ocosingo) confeccionado con base en documentación oficial del Ejército mexicano, puede alimentar la desconfianza zapatista y convertirse en un factor más de la reticencia de que el gobierno acusa al zapatismo armado.

La Conai, en fin, llega a este cuarto acto de San Andrés dolida por acciones gubernamentales. La deportación de los sacerdotes Loren Riebe, Rodolfo Izal y Jorge Barón, apresados con lujo de fuerza y remitidos con celeridad extrema a Estados Unidos, España y Argentina, sus países de origen, fue un golpe al plexo solar de esa comisión intermediaria. Puesta en práctica la acción en ausencia del obispo Samuel Ruiz García, sólo esa indelicadeza deliberada bastaría para comprender de qué se trata. Pero la Conai se refiere también al "constante asedio" de que es víctima directamente el

obispo de San Cristobal de las Casas, así como personas de su familia y de su confianza.

La comisión intermediaria formuló esa consideración en un documento emitido la víspera de la cuarta fase de San Andrés, en que convoca a todos a mantener la esperanza de que la política es el único camino para construir la paz. Pero no cualquier política, sino la que se hace "con el pueblo y sus organizaciones". Por eso, invoca al EZLN a "convertir su decisión militar de dar la vida, en una voluntad política de generar más vida con los millones de indígenas y pobres que esperan la oportunidad de ser sujetos de la historia".

La Conai enumera diversas manifestaciones de violencia en todo el país, y expone que Chiapas vive "un dramático momento de polarización, división y militarización". Esos factores, junto con los que directamente pueden entorpecer el diálogo de San Andrés y que han sido enumerados en los párrafos anteriores podrían hacer del encuentro de hoy el último en que se intente alcanzar la paz mediante la vía negociadora. Al menos podría ser el último en largo tiempo. Por supuesto, deseamos que nuestro pesimista previsión sea contradicha por la realidad.

PLAZA PÚBLICA
MIGUEL ANGEL GRANADOS CHAPA

San Andrés: ¿última llamada?

Diversos factores, relacionados con la situación específica de Chiapas o ligados a la violencia que se multiplica en el país, y circunstancias que afectan a las partes en la negociación, podrían constituirse en estorbos para el cuarto acto del encuentro entre el gobierno y los zapatistas.



A LAS TRECE HORAS DE HOY SE ABRIRÁ EL CUARTO capítulo de San Andrés, es decir de la ronda de conversaciones abierta entre la administración del presidente Zedillo y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. En las tres oportunidades anteriores se ha avanzado poco en el proceso de pacificación, pero se ha mantenido al menos la continuidad que implica convocar cada vez a nuevos encuentros. Podríamos haber llegado, sin embargo, al límite, y la reunión de hoy podría ser por desgracia el punto final de, al menos, esta fase de los intentos por negociar en vez de guerrear.

Varias circunstancias complican el entorno en que se reanudan hoy las conversaciones. Las enumeraremos en este orden: las que se relacionan con el gobierno, con el EZLN y con la Conai, la comisión mediadora.

Ayer lunes, apenas, tomó posesión un nuevo secretario de Gobernación. El anterior titular de esa oficina, Esteban Moctezuma, se encontró personalmente con el subcomandante insurgente Marcos el 15 de enero. Y si bien la reunión de entonces tenía un carácter institucional, y aunque a últimas fechas Marcos no mostraba buena opinión sobre su interlocutor, quizá el reemplazo del responsable de las conversaciones pudiera erigirse en un obstáculo o un factor de demora para el reencuentro.

Al anunciarse la sustitución de Moctezuma por Chuayfett se tuvo buen cuidado de advertir que esa medida no afectaba la integración ni las instrucciones del grupo gubernamental en el diálogo de San Andrés. Aparte el hecho de que tal anuncio comprobó que el grupo era ajeno a Moctezuma, la decisión ratifica la estrategia de endurecer las condiciones para una eventual negociación, y la exigencia de definiciones zapatistas. Según la perspectiva gubernamental, faltan estas definiciones (por más que consten desde el primer día del alzamiento, hace ya 18 meses), lo que posibilita al zapatismo armado no acreditar con suficiencia su voluntad negociadora.

El gobierno parece resuelto a arrinconar al zapatismo, para forzarlo a aceptar una

negociación limitada a temas indígenas y chiapanecos. Entre los medios de apremio que puso en práctica recientemente, sobresale la expulsión de tres sacerdotes, que actuaban en comunidades situadas en la zona del conflicto, acción que fue extraña o cínicamente considerada como útil para distensar las condiciones prevalecientes en esa comarca.

Por su parte, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional ha adoptado una iniciativa que, aunque no entraña en sí misma un freno a las conversaciones, podría obligar a una espera antes de continuarlas y llevarlas a su culminación. El zapatismo armado ha puesto su destino en manos de la sociedad civil, a la que consultará para saber su opinión sobre el curso futuro de las acciones zapatistas. La encuesta correspondiente será realizada a finales de agosto, por lo que el EZLN podría plantear que ni siquiera son pertinentes discusiones sobre reglas de procedimiento antes de que los zapatistas sepan a qué atenerse.

Igualmente pueden convertirse en obstáculos para el curso normal de los encuentros en San Andrés las objeciones zapatistas a la constante movilización militar, y otros hechos relacionados con la presencia castrense en la zona. En este sentido, el informe de la agrupación norteamericana de derechos humanos Americas Watch sobre episodios ocurridos al inicio de la insurrección

(principalmente la ejecución de varias personas en el mercado de Ocosingo) confeccionado con base en documentación oficial del Ejército mexicano, puede alimentar la desconfianza zapatista y convertirse en un factor más de la reticencia de que el gobierno acusa al zapatismo armado.

La Conai, en fin, llega a este cuarto acto de San Andrés dolida por acciones gubernamentales. La deportación de los sacerdotes Loren Riebe, Rodolfo Izal y Jorge Barón, apresados con lujo de fuerza y remitidos con celeridad extrema a Estados Unidos, España y Argentina, sus países de origen, fue un golpe al plexo solar de esa comisión intermediaria. Puesta en práctica la acción en ausencia del obispo Samuel Ruiz García, sólo esa indelicadeza deliberada bastaría para comprender de qué se trata. Pero la Conai se refiere también al "constante asedio" de que es víctima directamente el obispo de San Cristóbal de las Casas, así como personas de su familia y de su confianza.

La comisión intermediaria formuló esa consideración en un documento emitido la víspera de la cuarta fase de San Andrés, en que convoca a todos a mantener la esperanza de que la política es el único camino para construir la paz. Pero no cualquier política, sino la que se hace "con el pueblo y sus organizaciones". Por eso, invoca al EZLN a "convertir su decisión militar de dar la vida, en una voluntad política de generar más vida con los millones de indígenas y pobres que esperan la oportunidad de ser sujetos de la historia".

La Conai enumera diversas manifestaciones de violencia en todo el país, y expone que Chiapas vive "un dramático momento de polarización, división y militarización". Entre aquellas expresiones, cabe detenerse en el atentado sufrido el jueves 29 de junio por don Arturo Lona, obispo de Tehuantepec. La agresión a tiros, que pudo haber costado la vida del prelado, tiene una doble significación. Por un lado, se refiere a la propia tarea pastoral del señor Lona, ejercida en constante lucha contra caciques istmeños. Y por otra parte entraña una advertencia a don Samuel, por la similitud de su ministerio indígena con el que don Arturo desempeña en su propia diócesis.

Esos factores, junto con los que directamente pueden entorpecer el diálogo de San Andrés y que han sido enumerados en los párrafos anteriores podrían hacer del encuentro de hoy el último en que se intente alcanzar la paz mediante la vía negociadora. Al menos podría ser el último en largo tiempo. Por supuesto, deseamos que nuestra pesimista previsión sea contradicha por la realidad.

El atentado contra el obispo de Tehuantepec don Arturo Lona, a que se refiere el documento de la Conai, puede afectar las conversaciones de San Andrés en cuanto puede significar una intimidación al ministerio pastoral en comunidades indígenas